

**ACUERDO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

En Madrid, a 26 de febrero de 2020.

VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por doña A.A.M., en nombre propio contra los Pliegos de condiciones del contrato de “Realización del servicio de asistencia jurídica, judicial y social por abogado colegiado ejerciente y asistencia de Procurador, para la defensa en juicio de los bienes, derechos e intereses del Ayuntamiento de Alpedrete”. Expediente 1/2020, este Tribunal Administrativo de Contratación Pública ha adoptado la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En la Plataforma de Contratación del Sector Público de fecha 3 de febrero de 2020, se publica el anuncio de licitación de la contratación de referencia poniendo asimismo a disposición de los licitadores los Pliegos de condiciones. Esta licitación se ha dividido en tres lotes, cuyo valor estimado conjunto es de 202.000 euros, siendo el lote tercero el correspondiente a los servicios de Procurador de los Tribunales.

Segundo.- En fecha 18 de febrero presenta recurso especial en materia de contratación el recurrente, impugnando la cláusula del Pliego relativa a la valoración

del criterio económico, que consta en el Pliego de Cláusulas Administrativas con el siguiente tenor literal:

“13. Criterios de Adjudicación:

A. Criterios cuantificables automáticamente, se puntuarán en orden decreciente de la manera siguiente:

1.- Mejor Oferta económica (hasta 40 puntos).

1.2.- Lote 3:

Para el Lote 3 se indicará el porcentaje de descuento a aplicar en cada procedimiento judicial para los que sea designado sobre los honorarios fijados en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los derechos de los procuradores.

Para la valoración de este criterio se adjudicarán 40 puntos al mayor porcentaje de descuento ofertado y, proporcionalmente mediante regla de tres simple, a los siguientes”.

Tercero.- El día 20 de febrero se recibe informe y expediente administrativo del órgano de contratación conforme al artículo 56 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 46.4 de la LCSP y el artículo 3 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, corresponde a este Tribunal la competencia para resolver el presente recurso.

Segundo.- El presente recurso se presenta el 18 de febrero de 2020, dentro del plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a aquel en que se publicaron los Pliegos, según lo dispuesto en el artículo 50.1.b) de la LCSP.

Tercero.- El recurso se dirige contra los Pliegos de un contrato de servicios de valor estimado superior a 100.000 euros, siendo una actuación recurrible en esta vía conforme a los artículos 44.1.a 9 y 44.2.a) de la LCSP.

Cuarto.- Según establece el artículo 48 de la LCSP cualquier persona física o jurídica *“Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso”*, estando legitimada la recurrente por cuanto ostenta la condición de Procurador ejerciente colegiado según acredita con certificación de su Colegio de Procuradores de incorporación.

El propio Pliego establece este requisito como solvencia: Certificado de alta como ejerciente expedido por el Colegio Profesional del Procuradores en el que figure el profesional.

Quinto.- La recurrente impugna la cláusula transcrita en antecedente segundo, por vulnerar a su juicio el artículo 2 del Real Decreto 1373/2013 de 7 de noviembre que regula los aranceles de los Procuradores y que establece:

“Los derechos de arancel podrán ser objeto de un incremento o una disminución de hasta 12 puntos porcentuales cuando así lo acuerde expresamente el procurador con su representado para la determinación de los honorarios correspondiente a su actuación profesional”.

Este artículo establece un límite al posible descuento en los obligatorios aranceles, mientras el Pliego *“no establece límite alguno en el porcentaje de descuento que pueden ofertar los procuradores que concurran a la licitación”*.

En consonancia con esta infracción, tampoco se establecen límites a las posibles bajas temerarias en aplicación del susodicho precepto.

El órgano de contratación por su parte en el informe al recurso elaborado por el Secretario-Interventor alega: *“En la cláusula 7 del Pliego transcrita se establecen, para el caso de los Procuradores, unos precios unitarios que son los fijados por el arancel, vigente a la fecha de aprobación del pliego, de los derechos de los procuradores aprobado por Real Decreto 1373/2003 de 7 de noviembre.*

Dado que el propio Real Decreto 1373/2013 de 7 de noviembre, al fijar los honorarios de los Procuradores, fija también el límite de incremento o disminución en hasta 12 puntos porcentuales, es irrelevante que el Pliego no lo explicita, como no explicita tampoco la cuantía de los honorarios según el procedimiento de que se trate, porque se aplica directamente lo establecido en el citado Real Decreto”.

Este Tribunal Administrativo de Contratación Pública comparte la interpretación del órgano de contratación. El propio Pliego en la cláusula arriba transcrita establece que el porcentaje de descuento a aplicar es sobre los aranceles del Real Decreto 1373/2013 de 7 de noviembre, al fijar los honorarios de los Procuradores y forma parte de esos aranceles el límite máximo al descuento previsto en los mismos. Luego no es necesario que los Pliegos vuelvan a explicitarlo.

En las “consideraciones económicas” el PCAP dice:

“Se establecen unos precios unitarios que son los fijados por arancel, vigente a la fecha de aprobación del Pliego, de los derechos de los Procuradores aprobado por RD 1373/2003 de 7 de noviembre. Los precios a ofertar por los licitadores serán en forma de un porcentaje de descuento general a la baja, y no podrán exceder del presupuesto base de licitación”.

Por su parte el modelo de oferta económica mantiene el siguiente textual:

“LOTE 3 por el porcentaje de descuento a aplicar en cada procedimiento judicial para los que se designado sobre los honorarios fijados en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los derechos de los procuradores será del..... % de baja, más el IVA”.

La defensa de la regulación de la baja temeraria queda subsumida en la misma argumentación: no es posible una oferta que exceda de la previsión normativa del Reglamento de aranceles de los Procuradores.

Procede la desestimación del recurso porque los propios Pliegos remiten a la aplicación del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los derechos de los procuradores, donde se contiene la limitación de su artículo 2º en los descuentos a ofertar.

En su virtud, previa deliberación, por unanimidad, y al amparo de lo establecido en el artículo 46.4 de la LCSP y el artículo 3.5 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid:

ACUERDA

Primero.- Desestimar el recurso especial en materia de contratación formalizado por doña A.A.M., en nombre propio, contra los Pliegos de condiciones del contrato de “Realización del servicio de asistencia jurídica, judicial y social por abogado colegiado ejerciente y asistencia de Procurador, para la defensa en juicio de los bienes, derechos e intereses del Ayuntamiento de Alpedrete” Expediente 1/2020.

Segundo.- Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58 de la LCSP.

Tercero.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa, será directamente

ejecutiva y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, letra k) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, todo ello de conformidad con el artículo 59 de la LCSP.